



Proceso: Acción de tutela  
Radicación: 50 001 31 10 004 2024 00188 00  
Accionante: LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA  
Accionados: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS

## JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO VILLAVICENCIO - META

**URGENTE**

Villavicencio, siete (07) de mayo de dos mil veinticuatro (2.024).

Por ser procedente, se **ADMITE** la acción de tutela instaurada por la señora LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA, identificada con cedula de ciudadanía No. 21.176.187, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META por la protección de su derecho al trabajo, a la igualdad y/u otros derechos fundamentales. VINCULESE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, a la UNIVERSIDAD LIBRE, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG, a COLPENSIONES, a la AFP PORVENIR, a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, al COLEGIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA INSPECCIÓN DE POMPEYA, a la ESCUELA INTERNADO HOGAR JUVENIL PABLO SEGOVIA DE SAN CARLOS DE GUAROA, al COLEGIO NACIONALIZADO SAN CARLOS DE GUAROA, a la ARQUIDIOSECIS DE PASTORAL SOCIAL DE VILLAVICENCIO, a la ASOCIACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, a la INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE SAN CARLOS DE GUAROA y a los CONCURSANTES Y ELEGIBLES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NO. 2150 A 2237 DE 2021, 2316 Y 2406 DE 2022 (DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES).

Córrase traslado de la tutela y sus anexos al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META, a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, a la UNIVERSIDAD LIBRE, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG, a COLPENSIONES, a la AFP PORVENIR, a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, al COLEGIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA INSPECCIÓN DE POMPEYA, a la ESCUELA INTERNADO HOGAR JUVENIL PABLO SEGOVIA DE SAN CARLOS DE GUAROA, al COLEGIO NACIONALIZADO SAN CARLOS DE GUAROA, a la ARQUIDIOSECIS DE PASTORAL SOCIAL DE VILLAVICENCIO, a la ASOCIACIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, a la INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DE SAN CARLOS DE GUAROA y a los CONCURSANTES Y ELEGIBLES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NO. 2150 A 2237 DE 2021, 2316 Y 2406 DE 2022 (DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES), para que en ejercicio del derecho de defensa y contradicción y en el término improrrogable de **dos (2)** días contados a partir del recibo de la comunicación de este proveído, se sirva presentar las explicaciones correspondientes relacionadas con los hechos de la tutela, para que de las explicaciones respecto al tratamiento que le ha dado a la situación que originó la presunta vulneración, exponiendo las razones de hecho y de derecho y remitiendo la documentación que soporte su respuesta.



Háganse las prevenciones de los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991.

ORDÉNESE NOTIFICAR en debida forma el presente auto a los concursantes y elegibles en los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes), al correo electrónico aportado en los datos de identificación de los concursantes y elegibles, para lo cual se ORDENA a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, que a partir de sus bases de datos y de identificación personal (correo electrónico) de los aquí vinculados, proceda a la **notificación personal** del auto admisorio.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**OLGA LUCIA AGUDELO CASANOVA**  
Jueza

Señor(a)  
JUEZ DEL CIRCUITO  
(REPARTO)  
E. S. D.

### I. ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA

**AMPARO AL DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.), DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.) Y A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.); POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.), AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.), ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA EQUIDAD, EDUCACIÓN DE CALIDAD, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÉRITO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

1) **EL(LA) ACCIONANTE:** LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA, mayor de edad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma y con domicilio en la dirección: Villavicencio

2) **EL(LOS) ACCIONADO(S):**

a) **MINISTRO(A) DE EDUCACIÓN NACIONAL, Dr.(a) ALEJANDRO GAVIRIA URIBE**, quien lo sea o haga sus veces, al momento de la notificación y cuya dirección es la ciudad de **BOGOTÁ, D.C.**, en la **Calle 43 No. 57 - 14. CAN. Buzón de notificaciones judiciales:**  
[notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co)

b) **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE(L) META**

### II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS

Con el proceder que más adelante se detallará, considero que se ha vulnerado los derechos fundamentales consagrados en la **Constitución Nacional**, consistentes en el **DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.), DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.) Y A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.); POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.), AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.), ENTRE OTROS**, así como los principios de **LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA EQUIDAD, EDUCACIÓN DE CALIDAD, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÉRITO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

### III. EL HECHO

1. Que mediante Resolución 82 la Secretaría de Educación del Meta da por terminado mi nombramiento en provisionalidad en vacante definitiva como docente de Institución Educativa Gabriel García Márquez de San Carlos de Guaroa.

2. Que he prestado mis servicios en el sector público de la siguiente manera:

- Año: 1998

---

DEPARTAMENTO DEL META



SECRETARIA DE EDUCACION

Villavicencio, 29 de septiembre de 1998...

MEMORANDO

PARA: ..... as  
DE: ..... JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Me permito comunicar a Usted, que ha sido vinculada por Orden de prestación de Servicio Docente Temporal, como Profesora para el Colegio Departamental Alfonso López Pumarejo Inspección de Pompeya del Municipio de Villavicencio, en reemplazo de la titular EULALIA IBAGON ARDILA, quien se encuentra en licencia por Maternidad del 21 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 1998.

Efectividad del 30 de septiembre al 30 de noviembre de 1998.

Atentamente,

CLARA EUNICE POVEDA ROA

Yo. Po. MARIA STELLA ORTIZ RIVAS  
Secretaría de Educación

GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL META  
SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PERSONAL DOCENTE

MEMORANDO:

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO PERSONAL DOCENTE

PARA:

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 1999

Sírvase prestar sus servicios como docente del Situado Fiscal, en el Internado Pablo Segovia del Municipio de San Carlos de Guaroa, en reemplazo de PEDRO ANTONIO MERLO, quien renunció.

Efectividad del 24 de Agosto al 22 de Octubre o hasta tanto se termine la Vacancia definitiva del cargo.

Cordialmente,

  
LUIS ANTONIO PINO RENTERÍA

**GOBERNACION DEL META**  
**Secretaría de Educación del Meta**  
**Dirección Administrativa de Personal Docente**

**MEMORANDO:**

**DE:** LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL DOCENTE

**PARA:** LUZ OFELIA BORBON FONTECHA

**FECHA:** 26 DE OCTUBRE DE 1999

*Sírvase prestar sus servicios como Docente del Situado Fiscal en el Internado Pablo Segovia del Municipio de San Carlos de Guaroa, en reemplazo de PEDRO ANTONIO MERLO, quien renunció.*

*Efectividad del 26 de Octubre al 30 de Noviembre 1999, o hasta tanto se termine la vacancia definitiva del cargo.*

Cordialmente,

  
EDDY BAQUERO GARCIA

- Año 2.000:

---





MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
RIT.800.098.203-1

Teléfono: 6557111

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES No. 024 del 2.000 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y LUZ OFELIA BORBON FONTECHA

**NOMBRES Y APELLIDOS:** LUZ OFELIA BORBON FONTECHA

**CEDULA DE CIUDADANIA No:**

**TITULO OBTENIDO:** Licenciado en Educación Básica Primaria

**GRADO EN EL ESCALAFON NACIONAL:** Siete (7)

**OBJETO:** Prestación del Servicio como Docente de en la Escuela Internado Hogar Juvenil "Sargento Pablo Segovia" – Municipio San Carlos de Guaroa.

**FECHA DE INICACION:** 10 de Julio del 2.000

**FECHA DE TERMINACION:** Mientras se realice la novedad para proveer la plaza en forma definitiva ó a mas tardar el 29 de Septiembre del 2.000.

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** El Municipio de San Carlos de Guaroa le cancelará al Educador honorarios a razón de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.CTE (\$ 663.499,00)** mensuales o proporcional al tiempo servido cada mes o fracción al termino del servicio.

MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
RIT.800.098.203-1  
Teléfono: 6557111

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES No. 024 del 2.000 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y LUZ OFELIA BORBON FONTECHA

**NOMBRES Y APELLIDOS:** LUZ OFELIA BORBON FONTECHA

**CEDULA DE CIUDADANIA No:**

**TITULO OBTENIDO:** Licenciado en Educación Básica Primaria

**GRADO EN EL ESCALAFON NACIONAL:** Siete (7)

**OBJETO:** Prestación del Servicio como Docente de en la Escuela Internado Hogar Juvenil "Sargento Pablo Segovia" – Municipio San Carlos de Guaroa.

**FECHA DE INICACION:** 02 de Octubre del 2.000

**FECHA DE TERMINACION:** Mientras se realice la novedad para proveer la plaza en forma definitiva ó a mas tardar el 30 de Noviembre del 2.000.

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** El Municipio de San Carlos de Guaroa le cancelará al Educador honorarios a razón de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.CTE (\$ 663.499,00)** mensuales o proporcional al tiempo servido cada mes o fracción al termino del servicio.

- Debido al contrato interadministrativo No. 002 de 2001 entre la alcaldía municipal de San Carlos de Guaroa y la Diócesis de Villaviencio me vinculé como docente:

REPORTE DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PAGADA POR EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA  
CON RECURSOS DE P.I.C.N Y RECURSOS PROPIOS

MES DE FEBRERO DE 2001

Cód. Emp.	Cód. Mzro	Cód. Tipo	Número Doc. Ident	Tipo de Nómina	Establ. Depend.	Año	Mes	Cód. DANE	Jer. nota	Apellidos	Nombres	Clase Empl.	Tipo Vincul.	Estado Labor.	Pla. Financ.	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de ingreso	Días Lab.	Catg. paga	Gr.
50	680	1	40.370.163	M	0109	2001	02	150680000109	1	Baquiró Carrillo	Carmen	3	16	1	06	F	13/05/1963	02/01/2001	28	540	
50	680	1	31.031.779	M	0109	2001	02	150680000109	1	Contreras Esquivel	Rosa Elvira	3	16	1	06	F	04/04/1975	02/01/2001	28	540	
50	680	1	40.436.825	M	0109	2001	02	150680000109	1	Torres Dueñas	Nancy	3	16	1	06	F	26/05/1975	02/01/2001	28	540	
50	680	1	31.021.795	M	0109	2001	02	150680000109	1	Gutiérrez Yara	Aurora	3	6	1	06	F	09/06/1979	03/01/2001	26	605	
50	680	1	19.165.674	M	0109	2001	02	150680000109	1	Anzola Rocha	Delfin	3	6	1	06	M	14/02/1952	03/01/2001	26	615	
50	680	1	76.792.243	M	0109	2001	02	150680000109	1	Aranda	Antonio Heli	3	6	1	06	M	18/08/1946	03/01/2001	26	615	
50	680	1	7.822.646	M	0109	2001	02	150680000109	1	Díaz Rodríguez	Leonardo	3	6	1	06	M	15/01/1965	03/01/2001	26	615	
50	680	1	31.021.720	M	0109	2001	02	150680000109	1	Noguera Fino	Nidia	3	6	1	06	F	15/09/1965	03/01/2001	26	605	
50	680	1	21.176.187	M	0109	2001	02	150680000109	2	Borbón Fontecha	Luz Ofelia	1	8	1	07	F	13/05/1965	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	21.021.615	M	0109	2001	02	150680000109	2	Díaz Rodríguez	Bianca Nieves	1	8	1	07	F	02/01/1974	01/01/2000	26	9900	
50	680	1	40.403.465	M	0109	2001	02	150680000109	2	Quiroga Gavilón	Dora Liliana	1	8	1	07	F	05/12/1974	01/02/2001	26	9900	
50	680	1	40.298.156	M	0109	2001	02	150680000109	2	Nieto Díaz	Bianca Lilia	1	8	1	07	F	15/01/1970	01/02/2001	26	9900	
50	680	1	40.441.776	M	0109	2001	02	150680000109	2	Moreno Ortiz	Lidia María	1	1	1	07	F	03/08/1976	03/02/2001	28	9900	P.A.
50	680	1	17.341.874	M	0109	2001	02	150680000109	2	Velásquez Cortés	Albeiro	1	8	1	07	M	08/06/1969	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	65.711.076	M	0138	2001	02	250680000138	2	García Arteaga	Martha	1	8	1	07	F	10/01/1960	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.352.643	M	0138	2001	02	250680000138	2	Guerrero Céspedes	Rosaiba	1	8	1	07	F	15/03/1969	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	17.327.406	M	0138	2001	02	250680000138	2	Martínez Torres	Guillermo	1	8	1	07	M	05/11/1963	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.437.895	M	0138	2001	02	250680000138	2	Pabón Rodríguez	Luz Marina	1	8	1	07	F	15/01/1976	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.438.023	M	0138	2001	02	250680000138	2	Pinzón Ramírez	Liliana del Pilar	1	8	1	07	F	25/06/1976	01/02/2001	26	9900	
50	680	1	17.445.563	M	0138	2001	02	250680000138	2	Moreno Díaz	Higinio	1	8	1	07	M	10/01/1965	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.411.188	M	0014	2001	02	250680000014	2	Londoño Garcés	Martha Sorley	1	8	1	07	F	30/06/1978	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	30.090.502	M	0014	2001	02	250680000014	2	Urbano Baquero	Diana Paola	1	8	1	07	F	15/11/1978	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.432.711	M	0014	2001	02	250680000014	2	López Morales	Diana Enith	1	8	1	07	F	05/06/1980	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	52.189.355	M	0367	2001	02	250680000367	2	Ojarte Linares	Adriana Constanza	1	8	1	07	F	09/07/1975	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.386.263	M	0109	2001	02	150680000109	2	González	Luz Stella	1	8	1	07	F	04/01/1968	01/02/2001	28	9900	
50	680	1	40.429.316	M	0109	2001	02	150680000109	2	Amaya Tavares	María Isabel	1	1	1	07	F	13/07/1974	30/01/1998	28	9900	1
50	680	1	66.043.700	M	0109	2001	02	150680000109	2	Ramos Céspedes	Carlos Alberto	1	1	1	07	M	20/12/1971	11/09/1996	28	9900	1

LIBARDO BADILO CONDE  
Alcalde Municipal.

GABRIEL ALBERTO CUBILLOS GARCIA  
Personero Municipal

- Año 2001:



MUNICIPIO SAN CARLOS DE GUAROA  
ALCALDIA MUNICIPAL  
NIT.800.098.203-1  
Telefax: 6557111

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES No. 008 del 2.000 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Y LUZ OFELIA BORBON FONTECHA**

**NOMBRES Y APELLIDOS:** LUZ OFELIA BORBON FONTECHA  
**CEDULA DE CIUDADANIA No:**

**TITULO OBTENIDO:** Licenciado en Educación Básica Primaria

**GRADO EN EL ESCALAFON NACIONAL:** Siete (7)

**OBJETO:** Prestación del Servicio como Docente de en la Escuela Internado Hogar Juvenil "Sargento Pablo Segovia" - Municipio San Carlos de Guaroa.

**FECHA DE INICACION:** 01 de Febrero del 2.000

**FECHA DE TERMINACION:** Mientras se realice la novedad para proveer la plaza en forma definitiva ó a mas tardar el 16 de Junio del 2.000.

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** El Municipio de San Carlos de Guaroa le cancelará al Educador honorarios a razón de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.CTE (\$ 663.499,00)** mensuales o proporcional al tiempo servido cada mes o fracción al termino del servicio.

- En el año 2002:



ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No.15/2002

Señor (a): LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA  
C.C No.

Por medio de la presente orden solicitamos a usted se sirva prestar el servicio como DOCENTE, bajo la supervisión y vigilancia del Jefe de Gobierno. La cual se regirá por lo estipulado en el Estatuto de Contratación Administrativo de la Ley 80 de 1993, y las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:** Consiste en prestar sus servicios como Docente en el Colegio Nacionalizado San Carlos de Guaroa, en la jornada y condiciones que el Director del establecimiento educativo determine. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR:** El valor de esta orden es por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$2.456.409) con cargo al Código Presupuestal No. 52.01.02.01 denominado PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALARIOS SOCIALES DOCENTES de la vigencia fiscal 2002. **PARÁGRAFO - FORMA DE PAGO:** Se le retribuirán sus servicios por mensualidades vencidas a razón de \$818.803.00 previa certificación del Rector de la Institución Educativa sobre la prestación del servicio. **CLAUSULA TERCERA - DURACIÓN:** El termino de ejecución de lo pactado comprende tres (3) meses contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de mayo, termino en el cual no se podrá contratar ni subcontratar la totalidad de ello. **PARÁGRAFO:** El contratista es sabedor que la presente orden no genera relación laboral alguna, además se obliga a presentar afiliación a entidad de Seguridad Social. **CLAUSULA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista manifiesta bajo el gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente orden que no le existe ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley para suscribir esta orden de prestación de servicios.

Si este de acuerdo con los términos anteriores sírvase firmar este orden y devolverlo de inmediato, para constancia de lo anterior se firma en San Carlos de Guaroa, hoy primero (01) de marzo de 2002.

El Alcalde.

Quien Acepta

Luz Ofelia Borbón

C.C. No. 21.170.187 DE ACACIAS



**ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
No.37/2002

Señor (a): **LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA**  
C.C No.

Por medio de la presente orden solicitamos a usted se sirva prestar el servicio como **DOCENTE**, bajo la supervisión y vigilancia del Jefe de Gobierno. La cual se regirá por lo estipulado en el Estatuto de Contratación Administrativo de la Ley 80 de 1993, y las siguientes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMERA- OBJETO:** Consiste en prestar sus servicios como Docente en el Colegio Nacionalizado San Carlos de Guaroa, en la jornada y condiciones que el Director del establecimiento educativo determine. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR:** El valor de este orden es por la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MICTE (\$3.225.600)** presupuestal No. 52.01.02.01 denominado **PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALARIOS SOCIALES DOCENTES** de la vigencia fiscal 2002. **PARÁGRAFO - FORMA DE PAGO:** Se le retribuirán sus servicios por mensualidades vencidas a razón de \$864.000.00 previa certificación del Rector de la Institución Educativa sobre la prestación del servicio. **CLAUSULA TERCERA - DURACIÓN:** El termino de ejecución de lo pactado comprende tres (3) meses y veintidós (22) días contados a partir del ocho (8) de julio hasta el treinta y uno (31) de octubre, termino en el cual no se podrá contratar ni subcontratar la totalidad de ello. **PARÁGRAFO:** El contratista es sabedor que la presente orden no genera relación laboral alguna, además se obliga a presentar afiliación a entidad de Seguridad Social. **CLAUSULA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista manifiesta bajo el gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de la presente orden que no le asiste ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley para suscribir esta orden de prestación de Servicios.

Si esta de acuerdo con los términos anteriores sírvase firmar esta orden y devolverla de inmediato, para constancia de lo anterior se firma en San Carlos de Guaroa, a los ocho (8) días del mes de julio de 2002.

El Alcalde.

Quien Acepta

The image shows two handwritten signatures in black ink on a light-colored background. The signature on the left is more complex and stylized, while the signature on the right is simpler and more legible. Below the signature on the right, the name 'LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA' is printed in a small, dark font.

- Año 2003:



SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
OFICINA DE PERSONAL DOCENTE

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NUMERO 077

NOMBRE Y APELLIDOS: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA

CEDULA DE CIUDADANIA:

TITULO ACADEMICO: BASICA PRIMARIA

GRADO EN EL ESCALAFON: 7 SIETE

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA EN REEMPLAZO DE MARIA DOLORES QUINTERO ESCOBAR.

NOVEDAD ADMINISTRATIVA: RENUNCIA

FECHA DE INICIACION: 10 de Febrero de 2003

FECHA DE TERMINACION: 31 de Marzo de 2003

**VALOR Y FORMA DE PAGO:**

Con recursos del Sistema General de Participaciones se cancelará al Educador la suma de (\$1,497,600) UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL, por Honorarios a razón de (\$864000) OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL, mensuales por el tiempo de servicio





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
OFICINA DE PERSONAL DOCENTE  
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
NUMERO 2178

ok  
6.

NOMBRE Y APELLIDOS: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA  
CEDULA DE CIUDADANIA:  
TITULO ACADEMICO: BASICA PRIMARIA  
GRADO EN EL ESCALAFON: SIETE

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DOCENTE POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONALIZADO, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, EN REEMPLAZO DE MARIA DOLORES QUINTERO ESCOBAR.

NOVEDAD: RENUNCIA  
FECHA DE INICIACION: Julio 1, 2003  
FECHA DE TERMINACION: Noviembre 30, 2003

VALOR Y FORMA DE PAGO:  
Con recursos del Sistema General de Participaciones se cancelará al Educador la suma de, (\$ 4,320,000) - CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA LEGAL por Honorarios a razón de, (864,000.00) - OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL mensuales por el tiempo de servicio.

- Año 2004 a 2006

Que revisados los registros de planta de: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA identificado con C.C. número 21176187 expedida en Acacias (Met), ingresó a esta entidad el 19/01/2004 al 16/01/2006. Desempeña el cargo de Docente de aula grado PU, en el(la) I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Sede Principal Gabriel Garcia Marquez, en la ciudad de San Carlos De Guaroa (Met), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Definitiva, con una asignación básica mensual de 394.416 e ingresos adicionales por 0.

Total días: 728  
Tiempo total: 29 Dia(s) 11 Mes(es) 1 Año(s)

- Año 2006:

Que revisados los registros de planta de: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA identificado con C.C. número 21176187 expedida en Acacias (Met), ingresó a esta entidad el 22/08/2006 al 02/11/2006. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Sede Principal Gabriel Garcia Marquez, en la ciudad de San Carlos De Guaroa (Met), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Definitiva, con una asignación básica mensual de 849.590 e ingresos adicionales por 0.

Total días: 72  
Tiempo total: 12 Dia(s) 2 Mes(es) 0 Año(s)

- Año 2008:



Que revisados los registros de planta de: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA identificado con C.C. número 21176187 expedida en Acacias (Met), ingresó a esta entidad el 12/03/2008 al 15/07/2008. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) I.E. ISABEL LA CATOLICA - Sede Principal Isabel la Católica, en la ciudad de San Carlos De Guaroa (Met), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Definitiva, con una asignación básica mensual de 1.013.132 e ingresos adicionales por 0.

Total días: 125

Tiempo total: 4 Dia(s) 4 Mes(es) 0 Año(s)

- Año 2009:

### Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social Cáritas - Villavicencio

<b>NOMBRE DEL EMPLEADOR:</b> SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL- VILLAVICENCIO		<b>DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR:</b> Calle 30 N° 26-94 B. Porvenir Teléfono. 663 49 49	
<b>NOMBRE TRABAJADOR:</b> LUZ OFELIA BORBÓN FONTECHA		<b>N° CÉDULA:</b>	<b>DIRECCIÓN TRABAJADOR:</b>
<b>LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD:</b> Acacias 13 de Mayo de 1966, Colombiana.		<b>CARGO A DESEMPEÑAR:</b> Coordinadora de Internos	<b>TELÉFONO:</b> -----
<b>SALARIO:</b> OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$802.414)			
<b>PERIODO DE PAGO:</b> MENSUALIDADES VENCIDAS		<b>CUENTA DE AHORROS N°:</b> 364451625	<b>BANCO:</b> BOGOTA SUCURSAL CENTAUROS
<b>LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS LABORES:</b> Colegio Nacionalizado San Carlos de Guaroa, Sede Principal San Carlos de Guaroa (Meta).			
<b>TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO:</b> 20 de Marzo de 2009		<b>VENCE EL DÍA:</b> 02 de Octubre de 2009	



### Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social Cáritas - Villavicencio

#### "OTRO SI N° 01 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO No 005"

El día 3 de octubre de 2009 entre EL EMPLEADOR: Pbro. JOSÉ CRISANTO RAMOS PARDO, identificado con cedula de ciudadanía 19.204.966 expedida en Bogotá, en su calidad de representante legal del SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL CÁRITAS VILLAVICENCIO NIT 900.001.177-4, y EL TRABAJADOR: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA, identificado con la cédula N° 21176187 se suscribe la prórroga al contrato individual a término fijo inferior a un año acordado entre las partes.

**PRIMERA: DURACIÓN:** El otro si de este contrato tendrá la duración de 59 días calendario, comprendidos entre el día 03 de octubre de 2009 y el 30 de Noviembre de 2009 en las mismas condiciones.

- Año 2010:

**ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA  
NIT 822005162-1**

**CERTIFICA QUE:**

La señora **LUZ OFELIA BORBON FONTECHA**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. [REDACTED] para la empresa desde el (19) de Enero del 2010 hasta el (15) de Julio del 2010 con un contrato de trabajo por obra o labor contratada en el cargo de **COORDINADORA DE INTERNOS**.

Dada a los (22) días del mes de Mayo de 2019, a solicitud de la interesada.

- Año 2010 a 2024:

Que revisados los registros de planta de: BORBON FONTECHA LUZ OFELIA identificado con C.C. número [REDACTED] dida en Acacias (Met), ingresó a esta entidad el 14/07/2010 al 21/01/2024. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 2A, en el(la) I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Sede Principal Gabriel Garcia Marquez, en la ciudad de San Carlos De Guaroa (Met), con tipo de nombramiento Provisional Vacante Definitiva, con una asignación básica mensual de 2.929.064 e ingresos adicionales por 0.

Total días: 4.939

Tiempo total: 8 Dia(s) 6 Mes(es) 13 Año(s)

3. Que se puede observa llevo al servicio más de 20 años de servicios en el sector público.
  4. Que tengo 12,86 semanas cotizadas en Colpensiones:
-

### RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
21176187	BORBON FONTECHA LUZ	01/02/2003	28/02/2003	\$67.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21176187	BORBON FONTECHA LUZ	01/07/2003	31/07/2003	\$331.852	4,29	0,00	0,00	4,29
900001177	SECRETARIADO ARQUIDI	01/08/2008	30/11/2008	\$746.000	8,57	0,00	0,00	8,57
900001177	SECRETARIADO ARQUIDI	01/12/2008	31/12/2008	\$124.000	0,00	0,00	0,00	0,00
								[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS: 12,86
								[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 - "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"): 0,00

### RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
								[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:

### RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
		[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:

[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25] )	12,86
--	-------

5. Que tengo 70 semanas cotizadas con porvenir:

### C Historia Laboral en Porvenir S.A

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Periodo Inicial Mes/Año	Periodo Final Mes/Año	Ingreso Base De Cotización
NET	809991177	SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL - CARITAS VILLAVICENCIO	10/2008	11/2008	\$ 748,000
NET	809991177	SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL - CARITAS VILLAVICENCIO	12/2008	12/2008	\$ 124,000
NET	809991177	SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL - CARITAS VILLAVICENCIO	03/2009	03/2009	\$ 294,000
NET	809991177	SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL - CARITAS VILLAVICENCIO	04/2009	11/2009	\$ 802,000
NET	82299182	ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA	01/2010	01/2010	\$ 208,000
NET	82299182	ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA	02/2010	08/2010	\$ 518,000
NET	82299182	ASOCIACION SOCIAL DE COLOMBIA	07/2010	07/2010	\$ 257,500

**Total de semanas cotizadas: 70**

**¿Qué hago si me falta información?** Si su Historia Laboral no encuentra desactualizada, puede estar en contacto con nosotros por medio de la Línea de Servicio al Cliente, en Bogotá al 1441678, en Cali 4367772, en Medellín 6041659, en Barranquilla 3345241 y desde el resto del país al 01800351000 o a través de las Oficinas a nivel nacional.

Powered by CamScanner

## Tu Historia Laboral Consolidada

Tus datos personales

Señora LUZ Ofelia Borbon Fontecha  
 CC N° 21.176.187      Fecha de nacimiento: 13/05/1965      Fecha de generación: 11/12/2018

Requerimos que puedas consultar este documento a través de todos los canales Serviluz: Porvenir Portal Web, Audiorrespuesta, Punto de Atención Rápida, Porvenir Móvil y Chat.

### Semanas cotizadas para la pensión

<h4>RPM</h4> <p>Régimen de Prima Media</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>A</b> COLPENSIONES (ISS)  <span style="font-size: 24pt;"><b>14</b></span>                  Semanas             </div> <p><a href="#">Ver detalles</a></p> <p>Valor de tu bono personal a hoy: <b>D</b></p> <p>Fecha de redención estimada del bono: <b>No aplica</b></p> <p><small>Para tener derecho a bono pensional debes tener cotizadas mínimo 150 semanas al 31/03/2015 vía Rvta. María con anterioridad a la fecha de</small></p>	<h4>RAIS</h4> <p>Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>B</b> Otras Administradoras  <span style="font-size: 24pt;"><b>0</b></span>                  Semanas             </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>C</b> Porvenir  <span style="font-size: 24pt;"><b>70</b></span>                  Semanas             </td> </tr> </table> <p><a href="#">Ver detalles</a>      <a href="#">Ver detalles</a></p> <p>Saldo de la Cuenta Individual a la fecha de generación: <b>E</b> \$ 2,695,598</p>	<b>B</b> Otras Administradoras <span style="font-size: 24pt;"><b>0</b></span> Semanas	<b>C</b> Porvenir <span style="font-size: 24pt;"><b>70</b></span> Semanas	<div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;">                 Total de semanas cotizadas  <b>A + B + C</b>  <span style="font-size: 24pt;"><b>84</b></span> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; margin-top: 10px;">                 Capital total acumulado  <b>D + E</b>  <span style="font-size: 24pt;"><b>\$ 2,695,598</b></span> </div>
<b>B</b> Otras Administradoras <span style="font-size: 24pt;"><b>0</b></span> Semanas	<b>C</b> Porvenir <span style="font-size: 24pt;"><b>70</b></span> Semanas			

6. Conforme lo anterior, siendo mi último lugar de trabajo la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE(L) META** en el cargo de docente oficial nombrado en provisionalidad definitiva, pertenezco al Régimen Pensional del **Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG** contemplado en la **Ley 91 de 1989**, el artículo 81 de la **Ley 812 de 2003** y el **parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005**.
7. El **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** en cumplimiento del **artículo 2.4.6.3.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015**, adicionado por el **artículo 1º del Decreto 490 de 2016**, expidió la **Resolución No. 15683 de 2016**, modificada por la **Resolución No. 00253 de 2019**, a su vez derogados por la **Resolución No. 3842 de 2022**, esto es, el **Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos Docentes y Directivos Docentes y del Sistema Especial de Carrera Docente**, en el cual se estableció las funciones y competencias laborales de dichos empleos, así como los requisitos mínimo de formación académica, experiencia y demás competencias exigidas para la provisión de dichos cargos y su desempeño.



8. Mediante **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022<sup>1</sup> (Directivos Docentes y Docentes)**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, realiza la convocatoria para el Concurso de Méritos de Directivos Docentes y Docentes a nivel Nacional (población mayoritaria y zonas rurales afectadas por el conflicto).
9. A través de la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE(L) META** dio cumplimiento al **artículo 2.4.1.1.4. del D.U.R.S.E. 1075 de 2015 (subrogado por el Decreto 915 del 1 de junio de 2016)**, el cual determina que, para dar apertura a la convocatoria, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC** solicitará a Gobernadores y Alcaldes de cada entidad territorial certificada en educación el reporte de los cargos que se encuentren en vacancia definitiva. En ese sentido, la entidad territorial certificada en educación a la cual pertenezco, reportó, certificó y actualizó las vacantes definitivas de los empleos docentes y directivos docentes oficiales pertenecientes al Sistema Especial Carrera Docente, que hacen parte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, de conformidad con la solicitud efectuada por la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**.
10. **Nací el 04 de MAYO de 1966 y en la actualidad cuento con 58 años de edad**, luego, cumplí el estatus prepensionado, dentro de las reglas establecidas en el **artículo 81 de la Ley 812 de 2003** y el **parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005**, en cualquiera de las siguientes opciones:
- 3.1. **Pensión de Jubilación (Ley 91 de 1989): cincuenta y cinco (55) años de edad (hombres y mujeres); veinte (20) años de servicio en el sector público (docente oficial).**
  - 3.2. **Pensión por Aportes (Ley 71 de 1988): cincuenta y cinco (55) años de edad (mujeres) o sesenta (60) años de edad (hombres); veinte (20) años de servicio, computables con tiempos en el sector privado (COLPENSIONES).**
  - 3.3. **Pensión de Vejez (Ley 100 de 1993): cincuenta y siete (57) años de edad (mujeres y hombre); mínimo 1.300 semanas de cotización.**

En mi caso particular, actualmente ostento más de 20 años de servicio activo con el Magisterio Docente y, **tengo 58 años de edad**, por lo tanto, tengo la calidad de persona Pre Pensionada, pues tan solo me hace falta que me sea reconocida mi mesada pensional, ya que he cumplido los requisitos de mi derecho fundamental a la Pensión de Jubilación, esto es: tener 55 años de edad y 20 años de servicios activo, por lo que considero que, ostento la calidad de persona de especial protección constitucional, de modo que, merezco garantías y acciones afirmativas de protección a mis derechos fundamentales al trabajo y a la Pensión de Vejez.

11. Actualmente me encuentro completando los requisitos de **edad, tiempo de servicio o semanas de cotización**, para obtener mi **pensión de jubilación (Ley 33 de 1985), pensión por aportes (Ley 71 de 1988) o pensión de vejez (Ley 100 de 1993)**, por lo que, al faltarme menos de tres (3) años para consolidar el derecho pensional, me ubica en calidad de PREPENSIONADO(A), cobijado por la estabilidad laboral reforzada establecida en la **Ley 790 del 2002, Ley 1955 de 2019, Ley 2040 de 2020 y el Decreto 1415 de 2021**.
12. De conformidad con el **artículo 12 de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002** “*por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República*”, se estableció lo siguiente:

**“Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.”** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

<sup>1</sup> <https://historico.cnsc.gov.co/index.php/2150-a-2237-de-2021-directivos-docentes-y-docentes>

13. Por su parte, el **parágrafo 2º del artículo 263** de la **Ley 1955 del 25 de mayo de 2019** “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’”, estableció:

**“ARTÍCULO 263. REDUCCIÓN DE LA PROVISIONALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.** Las entidades coordinarán con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la realización de los procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa y su financiación; definidas las fechas del concurso las entidades asignarán los recursos presupuestales que le corresponden para la financiación, si el valor del recaudo es insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9º de la Ley 1033 de 2006.

(...)

**Parágrafo 2º. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional.**

Surtido lo anterior los empleos deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley 909 de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años.

**El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren en la situación antes señalada.**

**Para los demás servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y en situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados, lo anterior sin perjuicio del derecho preferencial de la persona que está en la lista de ser nombrado en el respectivo empleo...** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

14. Luego, el **artículo 8º de la Ley 2040 del 27 de julio de 2020** “por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones”, determinó:

**“ARTÍCULO 8º, Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos, Las personas a las que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez, que hagan parte de las plantas de las entidades públicas en nombramiento provisional o temporal y que, derivado de procesos de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito, deberían ser separados de sus cargos, serán sujetos de la especial protección por parte del Estado y en virtud de la misma deberán ser reubicados hasta tanto adquieran los requisitos mínimos para el acceso al beneficio pensional.**

**Parágrafo 1,** El Gobierno Nacional reglamentará el presente artículo dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la ley, sin que superado' este término el Gobierno Nacional pierda la función reglamentaria...” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

15. Finalmente, los **artículos 1º al 3º del Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021** “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado a la Protección en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos para el personal que ostenten la condición de prepensionados”, reglamentaron de manera exegética:

**“ARTÍCULO 1.** Modificar el artículo 2.2.12.1.2.2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:

**ARTICULO 2.2.12.1.2.2. Trámite.** Para hacer efectiva la estabilidad laboral de que trata el artículo anterior, **los organismos y entidades que modifiquen sus plantas de personal permanente o temporal respetarán las siguientes reglas:**

**1. Acreditación de la causal de protección:**

**a) Madres o padres cabeza de familia sin alternativa económica:** Los jefes de personal, o quienes hagan sus veces, verificarán en las hojas de vida de los servidores públicos, que pretendan beneficiarse de la protección especial y en el sistema de información de la respectiva Entidad Promotora de Salud, EPS, y en las Cajas de Compensación Familiar, que se cumplan las condiciones señaladas en el presente decreto y que en el grupo familiar de la solicitante no existe otra persona con capacidad económica que aporte al sistema de seguridad social.

Así mismo, **la condición de invalidez de los hijos**, siempre que dependan económica y exclusivamente de quien pretenda ser beneficiaria de la protección especial, deberá ser probada por la servidora pública con un dictamen de la respectiva Junta de Calificación de Invalidez;

**b) Personas con limitación visual o auditiva:** Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben solicitar la valoración de dicha circunstancia, a través de la Empresa Promotora de Salud, EPS, a la cual estén afiliados y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación. El organismo o entidad, en caso de duda, solicitará por conducto del jefe de personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la valoración presentada al Instituto Nacional para Ciegos (INCI) para las limitaciones visuales; y al Instituto Nacional para Sordos (INSOR) para las limitaciones auditivas;

**c) Personas con limitación física o mental:** Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben obtener el dictamen de calificación del equipo interdisciplinario de calificación de invalidez de la Empresa Promotora de Salud, EPS, o Administradora de Riesgos Laborales, ARL, a la cual estén afiliados, o de no existir este organismo, de la Junta de Calificación de Invalidez y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación. El organismo o entidad, podrá solicitar por conducto del jefe de personal, o de quien haga sus veces, la verificación de la valoración presentada a las Juntas de Calificación de Invalidez;

**d) Personas próximas a pensionarse:** **Sin perjuicio de que el servidor público que considere encontrarse en este grupo adjunte los documentos que acreditan la condición que invoca, los jefes de personal o quienes hagan sus veces deben verificar que a los servidores que puedan encontrarse en estas circunstancias en efecto les falten tres (3) años o menos para reunir los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez, y expedir constancia escrita en tal sentido.**

El jefe del organismo o entidad deberá verificar la veracidad de los datos suministrados por el destinatario de la protección.

**2. Aplicación de la protección especial:**

Con base en las certificaciones expedidas por los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces y en las valoraciones del tipo de limitación previstas en el numeral anterior, el secretario general de la respectiva entidad analizará, dentro del estudio técnico correspondiente a la modificación de la planta de personal permanente o temporal y teniendo en cuenta la misión y los objetivos del organismo o entidad, el cargo del cual es titular el servidor público que se encuentra en alguno de los grupos de la protección especial y comunicará a los jefes de la entidad respectiva **los cargos que de manera definitiva no podrán ser suprimidos o las personas a quienes se les deberá respetar la estabilidad laboral.**

*En caso de supresión del organismo o entidad, la estabilidad laboral de los servidores públicos que demuestren pertenecer al grupo de protección especial de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, se mantendrá hasta la culminación del proceso de supresión o liquidación. La garantía para los servidores próximos a pensionarse deberá respetarse hasta el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez.*

**Parágrafo.** *En el caso de los organismos y entidades que cuenten con plantas temporales, aplicarán las reglas establecidas en el presente artículo, hasta el término de duración señalado en el acto administrativo por la cual se creó o prorrogó la planta temporal. La protección especial de que trata este artículo aplicará solamente mientras la vigencia de la planta temporal.*

**ARTICULO 2.** Adicionar el artículo 2.2.12.1.2.4 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:

**ARTICULO 2.2.12.1.2.4. Provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito.** Para el caso de la provisión definitiva de cargos públicos a través de concursos de mérito de servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional que les falte tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación o de vejez, se deberá tener en cuenta lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019.

**ARTICULO 3.** Adicionar el artículo 2.2.12.1.2.5 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:

**ARTICULO 2.2.12.1.2.5. De la reubicación para los servidores públicos prepensionados.** En cumplimiento de la protección especial en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos, los servidores públicos que les falten (3) tres años o menos para obtener la pensión de jubilación o vejez y no puedan continuar en el ejercicio de su cargo por razones de reestructuración o provisión definitiva, deberán ser reubicados como lo señala el artículo 8 de la Ley 2040 de 2020 hasta tanto cumplan con los requisitos para obtener el beneficio pensional. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.12.1.2.2... (Negritas y subrayas fuera de texto).

16. De conformidad a lo expuesto, la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE(L) META**, al reportar la plaza que ocupó como docente en provisionalidad definitiva, en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, **desconoció e inaplicó de manera irregular** lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002, el parágrafo 2º del artículo 263 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, el artículo 8º de la Ley 2040 del 27 de julio de 2020 y los artículos 1º al 3º del Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021, configurando de manera directa una violación a mis derechos fundamentales consagrados en la **Constitución Nacional**, consistentes en el **DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.)**, **DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.)** Y **A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.)**; **POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.)**, **DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.)**, **LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.)**, **AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.)**, ENTRE OTROS, así como los principios de **LA CONFIANZA LEGÍTIMA**, **LA EQUIDAD**, **EDUCACIÓN DE CALIDAD**, **DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO**, **MÉRITO** Y **LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**.
  17. Así, con los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** desconoce(n) que en la actualidad me encuentro completando la **edad, tiempo de servicio o semanas de cotización**, para obtener mi **pensión de jubilación (Ley 33 de 1985)**, **pensión por aportes (Ley 71 de 1988)** o **pensión de vejez (Ley 100 de 1993)**, por lo que, al faltarme menos de tres (3) años para consolidar el derecho pensional, me ubica en calidad de prepensionado, cobijado por la estabilidad laboral reforzada establecida en la **Ley 790 del 2002**, **Ley 1955 de 2019**, **Ley 2040 de 2020** y el **Decreto 1415 de 2021**.
  18. Desconoce(n) igualmente los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, tanto el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la
-



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, que el actual Concurso de Méritos para Directivos Docentes y Docentes, sin respetar mi estatus de ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A) que propugno, afecta de manera grave mi derecho fundamental a la vida y a mi forma de subsistencia, como quiera que la futura e inminente terminación de mi vinculación en provisionalidad definitiva, me deja de un momento a otro sin trabajo y sin forma de responder por los requerimientos y necesidades económicas y alimenticias propias y de mi familia, situaciones estas que generan una mayor afectación en el núcleo esencial de mis derechos y el de mi familia.

19. La protección especialísima que tiene el derecho fundamental al trabajo, es trasgredido por la(s) Entidad(es) accionada(s), toda vez que el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y en especial, la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, de manera abierta y flagrantemente, al reportar las plazas docentes vacantes, desconoció e inaplicó de manera irregular lo contemplado en el **artículo 12** de la **Ley 790 del 27 de diciembre de 2002**, el **parágrafo 2º del artículo 263** de la **Ley 1955 del 25 de mayo de 2019**, el **artículo 8º** de la **Ley 2040 del 27 de julio de 2020** y los **artículos 1º al 3º** del **Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021**, y a su vez desconoció que la actividad laboral docente está supeditada a las normas contenidas no solamente en el **Decreto – Ley 2277 de 1979** y el **Decreto 1278 del 2002**, sino que se enmarcan dentro del **BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (Arts. 93 y 94, C. N.)** y goza de la especial protección del Estado en todas sus formas – **DERECHO A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C. N.)** – y en este caso en cuanto a la profesionalización que está siendo truncada por la Entidad accionada.
20. El trabajo y su protección estatal, la dignidad humana y del trabajador, los principios mínimos de las relaciones laborales crean entre si un bloque de derechos inalienables del trabajador, los cuales deben ser garantizados por la acción del Estado en todas sus instancias. Así pues, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, controvierten de manera abierta los postulados de la **IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C. N.)**, al forzarme a aceptar una terminación unilateral de un nombramiento provisional definitivo, sin el mínimo respeto a la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A), lo que afecta de manera flagrante mi situación personal, laboral, patrimonial y pensional.
21. El derecho a la **DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C. N.)** fue abiertamente conculcado por el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, ya que dicha esfera contiene los principales postulados individuales que debe proteger el Estado Social y Democrático de Derecho; y la(s) Entidad(es) al realizar los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, inaplicando el **artículo 12** de la **Ley 790 del 27 de diciembre de 2002**, el **parágrafo 2º del artículo 263** de la **Ley 1955 del 25 de mayo de 2019**, el **artículo 8º** de la **Ley 2040 del 27 de julio de 2020** y los **artículos 1º al 3º** del **Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021**, sin autorización ni participación del interesado(a) (o por lo menos, con orden judicial), oculta y mediante una figura (Proceso de Selección), por lo que la presente Acción Constitucional emerge como protección **exclusiva e inmediata** del orden constitucional, legal o del interés público, al haberme de mi papel activo como **ciudadano(a) plenamente capaz y reconocido(a)** por el Estado de intervenir en la solución de los conflictos en los cuales estén inmersos mis intereses, reduciendo su personalidad jurídica a un mero sofisma de identificación.
22. El **DERECHO AL TRABAJO, A SUS BENEFICIOS MÍNIMOS Y A LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C. N.)** está siendo desconocido con la actuación irregular del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, toda vez que el trabajo (en todas sus formas) contiene para este caso, por lo menos, los siguientes derroteros: **a)** irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; **b)** situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; **c)** primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; y, **d)** la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Con los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, inaplicando el **artículo 12** de la **Ley 790 del 27 de diciembre de 2002**, el

---

parágrafo 2º del artículo 263 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, el artículo 8º de la Ley 2040 del 27 de julio de 2020 y los artículos 1º al 3º del Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021, se contravienen los postulados establecidos en el párrafo precedente, ya que las garantías impuestas por el Constituyente de 1991 son tergiversadas y olvidadas por la(s) Entidad(es) accionada(s) al establecer – de *Perogrullo*, que la plaza docente que ocupó mediante nombramiento provisional de carácter definitivo, no contiene elementos nocivos para el ordenamiento jurídico ni mucho menos para mi situación personal.

23. Con la actuación propuesta en los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, se está quebrantando el ordenamiento constitucional y se está afectando de manera directa mi situación personal, familiar, laboral y pensional, razón por la cual se asiste a este estrado con miras a obtener un pronunciamiento judicial.

#### IV. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. La Honorable Corte Constitucional ha sostenido sobre el **DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO (Art. 29, C. N.)**:

*“...**(i) es un derecho fundamental de rango constitucional**; (ii) implica todas las garantías mínimas del debido proceso concebido en el artículo 29 de la Constitución; **(iii) es aplicable en toda actuación administrativa incluyendo todas sus etapas, es decir, desde la etapa anterior a la expedición del acto administrativo, hasta las etapas finales de comunicación y de impugnación de la decisión**; y **(iv) debe observar no solo los principios del debido proceso sino aquellos que quían la función pública, como lo son los de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...**” (Negrilla y subrayas fuera de texto).*

El debido proceso administrativo establece límites a las autoridades mediante las leyes y garantiza derechos a los administrados. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B<sup>2</sup>:

*“...La Constitución Política de 1991, en su Artículo 29 consagra el derecho fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad (...), el cual constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho, toda vez **que impone un límite claro al ejercicio del poder público**, en especial, a la aplicación del *ius puniendi*, teniendo en cuenta que las funciones del Estado deben ser desarrolladas, con la estricta observancia de los lineamientos o parámetros establecidos previamente por el legislador.*

**El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa.** (...)

*Entonces, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho fundamental objeto de estudio en el presente acápite ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como **debido proceso administrativo**, que hace referencia a **la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por las decisiones de la administración.** La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo está constituido por las siguientes prerrogativas:*

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 11 de abril de 2019, Radicado: 05001-23-33-000-2014-02189-01(1171-18), C.P. dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”. (...)

**En virtud de lo expuesto, el debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa...** (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la Sentencia SU-913 de 2009<sup>3</sup>:

**“... (i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales;** (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se auto vincula y auto controla, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido...” (Negrillas y subrayas son mías).

Es absolutamente claro que con el actuar del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, a través de los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, conculca de manera flagrante los principios del debido proceso administrativo, materializados en el **artículo 209 de la Constitución Nacional** y desarrollados en el **artículo 3 del C.P.A.C.A.** La vulneración al principio del debido proceso se mantuvo, pues la(s) accionada(s) generaron una omisión y extralimitación en las facultades reglamentarias, que vulneraron los principios constitucionales que corresponden al debido proceso administrativo y los principios que orientan la función pública.

2. Tratándose del **DERECHO AL TRABAJO**, en Sentencia T-257 de 2012<sup>4</sup>, la Corte Constitucional en relación con el acceso a los cargos públicos, señaló lo siguiente:

**“...Respecto del derecho al trabajo en relación con el acceso a los cargos públicos, ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación (...) que dicha garantía se materializa en cabeza del ganador del concurso, a quien le asiste el derecho de ser nombrado; en este sentido, a la posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del deber estatal de impedir que terceros restrinjan dicha opción (...). Al tratar esta materia en sentencia T-625 de 2000, el Tribunal Constitucional indicó:**

<sup>3</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU-913 del 11 de diciembre del 2009, M.P. dr. Juan Carlos Henao Pérez.

<sup>4</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-257 del 29 de marzo del 2012, M.P. dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

**‘La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima’...** (Negrillas y subrayas son mías).

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado que el sistema del mérito tiene como propósito específico procurar la igualdad de trato y oportunidades, de manera que los mejores calificados sean quienes ocupen los cargos públicos. En efecto, esta forma permite la participación de cualquier persona que cumpla con los requisitos del empleo, en un esquema en el que no se permiten tratos diferenciados injustificados, y cuyos resultados se obtienen a partir de procedimientos previamente parametrizados. Incluso, la aplicación de este método permite eliminar la discrecionalidad del nominador y evitar que imperen criterios arbitrarios y subjetivos en la selección de los aspirantes.

Es claro que los concursos de méritos, como mecanismo de selección objetivo e imparcial, están sujetos a los **PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, AL PRINCIPIO DE BUENA FE Y AL DEBIDO PROCESO**, que orientan la actuación de la administración.

En este orden de ideas, y conforme lo probado en lo tratado, es pertinente recordar que el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades en relación con las denominadas reglas de la convocatoria, destacando: Las reglas de la convocatoria, entonces, controlan la actividad de la propia administración y, a su vez, permiten, en general, a los concursantes conocer las reglas básicas del concurso, el cargo ofertado, los criterios o requisitos mínimos para participar, la forma en que los evaluarán, las etapas del concurso, las pruebas que deben presentar, el resultado que deben obtener para aprobar el concurso, la metodología para evaluar, entre otros aspectos. Concretamente, la sujeción a las reglas de la convocatoria implica, por un lado, que la administración no puede alterar inesperadamente las reglas previamente fijadas, pues las modificaciones intempestivas afectarían el principio de buena fe de los aspirantes que confían en que tales reglas se mantengan. Y, por otro lado, implica que el aspirante, una vez se inscribe al concurso, queda sometido a esas reglas y posteriormente no podrá pretender que se modifiquen en su favor ni en detrimento de otros concursantes.

De igual forma, en Sentencia SU-446 de 2011<sup>5</sup>, la Corte Constitucional definió la importancia de las Convocatorias en los concursos de Méritos, y el respeto exegético al marco normativo en las mismas, al manifestar:

*“La convocatoria es ‘la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes’, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados concursantes. **Por tanto, como en ella se delinear los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento.** La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. **En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.**”*

(...)

***Las reglas del concurso son invariables tal como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar ‘...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera **en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos**’...**”* (Negrillas y subrayas fuera del texto).

<sup>5</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU-411 del 26 de mayo de 2011, M.P. dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3. La Honorable Corte Constitucional ha sostenido sobre el **DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C. N.)** que:

*“...Se trata de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuando una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. En este caso se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables. Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga diferencias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. La igualdad de protección consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efectivamente, “gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades” (art. 13). Esta dimensión del principio de igualdad, por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual. Es positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones objetivas relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el Estado adopte acciones para garantizar la igual protección. Para saber si esta dimensión del derecho a la igualdad ha sido violada es preciso constatar el grado efectivo de protección recibida a los derechos, libertades y oportunidades, y en caso de existir desigualdades, establecer si se han adoptado medidas para superar ese estado de cosas y cumplir así el mandato de la Carta Política. No basta con saber si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere determinar si la protección brindada por las leyes es igual para quienes necesitan la misma protección.”<sup>6</sup>*

Mediante **Convenio 122 del 9 de julio de 1964**, los países integrantes de la **Organización Internacional del Trabajo – OIT** se comprometieron a adoptar las medidas necesarias a generar una política de pleno empleo productivo y libremente elegido, garantizando entre otras *“...c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social...”*<sup>7</sup> (Subrayo). El Gobierno colombiano, que se encuentra en mora de ratificar dicho convenio para que haga parte del bloque de constitucionalidad (Art. 93, C. N.) vulnera a través de la(s) determinación(es) adoptada(s) por las Entidades accionadas el artículo 13 de la Carta, trasgrediendo el derecho de igualdad para los docentes que, con los mismos requisitos acreditados, mantienen su cargo en provisionalidad, de conformidad a la normatividad vigente.

**4. El PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA** tiene su origen en el texto Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, y se ha entendido que este impone límites a los cambios normativos provenientes de los órganos estatales productores de derecho, cuando afectan las expectativas legítimas de los particulares.

En este sentido, se trata de una garantía en favor de las personas, que restringe la posibilidad de que se emitan decisiones abruptas y sorpresivas, sin adoptar medidas de transición o que minimicen los efectos negativos que el cambio de regulación les implica. Es decir, que su alcance no es el de hacer intangibles o inmodificables las disposiciones jurídicas, sino el de reducir el impacto negativo que el cambio en ellas pueda producir.

Es importante resaltar la íntima relación que tiene este principio con los de buena fe, seguridad jurídica y respeto por el acto propio. Este último, conocido también por la locución latina *“Venire contra factum*

<sup>6</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-507 del 25 de mayo del 2004, M.P. dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<sup>7</sup> Tomado de: <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C122>



*proprium non valet*<sup>8</sup>, señala que un sujeto que ha emitido un acto, que ha definido una situación jurídica particular y concreta, en favor de otro, está impedido para modificar unilateralmente su decisión, porque de hacerlo, estaría violando la confianza que se generó con la primera conducta desplegada.

De acuerdo con lo anterior, para la configuración del principio de confianza legítima, la Corte Constitucional fijó en la Sentencia T-311 de 2016<sup>9</sup>, los siguientes presupuestos:

*“... (i) La necesidad de preservar de manera concreta un interés público, esto es, resulta indispensable para la administración generar un cambio en sus actuaciones en aras de proteger el interés general; (ii) la demostración de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; (iii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iv) la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad. En esa medida, las actuaciones de la Administración que generen un cambio súbito en las condiciones que regulan las relaciones con los administrados, en donde exista una expectativa justificada, deben estar precedidas de un periodo de transición donde se brinde a los particulares el tiempo y los medios necesarios para que se ajusten a la nueva situación jurídica. Esa confianza, producto de la buena fe, da lugar a la aplicación de soluciones por parte del Estado, sin que esto signifique una donación, reparación, resarcimiento o indemnización a favor del particular, ni el desconocimiento del principio del interés general...”*

En síntesis, el principio de confianza legítima se convierte en un deber jurídico de la administración frente a los administrados, que ha de atender en el ejercicio de la potestad de expedir actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, en detrimento de las ya consolidadas para ellos.

De forma imperativa la Constitución Nacional ha establecido que el **PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA**: *“...Esta exigencia que se predica de todas las relaciones de derecho, asume una entidad más significativa en aquellas en que participa la administración, como quiera que en los inicios de la evolución del derecho administrativo, el Estado carecía de responsabilidad frente a los administrados, circunstancia cuya reminiscencia podría afectar el normal devenir de las situaciones jurídicas, si no hubiera, en la actualidad, plena claridad respecto de los principios que irradian la actividad del Estado, dentro de los que se destaca el de buena fe, en sus dimensiones de respeto por el acto propio y confianza legítima.”*<sup>10</sup>

Así las cosas se convierte en regla *sinne quantum* para las actuaciones de la Administración: *“...Cuando la confianza legítima en que un procedimiento administrativo será adelantado y culminado de conformidad con las reglas que lo rigen es vulnerada, se presenta una violación del debido proceso en la medida en que este derecho comprende la garantía de que las decisiones adoptadas por la administración lo serán de tal manera que se respeten las reglas de juego establecidas en el marco legal así como las expectativas que la propia administración en virtud de sus actos generó en un particular que obra de buena fe. En efecto, la Constitución misma dispuso que una de las reglas principales que rigen las relaciones entre los particulares y las autoridades es la de que ambos, en sus actuaciones, “deberán ceñirse a los postulados de la buena fe.”*<sup>11</sup>

5. Frente al **DERECHO AL DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.)** ha manifestado la Corte Constitucional que:

*“...El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes.”* (Sentencia C-540 del 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

Y por los errores en los Actos Administrativos, la posición que ha asumido la Corte Constitucional es la siguiente:

<sup>8</sup> No se permite ir contra el propio acto.

<sup>9</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-311 del 16 de junio del 2016, M.P. dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

<sup>10</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-321 del 3 de mayo del 2007, M.P. dr. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>11</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-730 del 5 de septiembre del 2002, M.P. dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

“...Como regla general la acción tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, pues para ello existen las acciones correspondientes ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, juez natural de este tipo de procedimientos, en donde la estructura del procedimiento judicial permite un amplio debate probatorio relativo a las circunstancias que podrían implicar una actuación de la Administración contraria a Derecho. Por esta razón, la acción de amparo solo cabría ante una vulneración o amenaza de vulneración ostensible y grave de derechos, que no pudiera detenerse o precaverse sino por medio de la decisión rápida del juez constitucional, o ante la comprobada ineficacia, según las circunstancias del caso, de la acción contenciosa legalmente prevista. No obstante, cuando la actuación administrativa a la que se acusa de ser vulneratoria de derechos fundamentales es aquella que culmina con la revocatoria de un acto propio por parte de la Administración, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado una doctrina según la cual la acción de tutela es procedente, en atención a los principios de buena fe y de seguridad jurídica. **En efecto, Si en dichas actuaciones administrativas no se observa el procedimiento legalmente previsto, y si ello repercute en la afectación del derecho al debido proceso de los interesados en la decisión administrativa, la acción de tutela se erige como un medio de defensa judicial adecuado, pero solamente si no existe otro mecanismo de defensa judicial que sirva para garantizar tales derechos, o si existiéndolo no se revela como un mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, o se cierne la amenaza inminente de un perjuicio irremediable sobre esta clase de derechos.**

(...)

**En relación con los actos administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, es necesario obtener el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular para poder proceder a su revocatoria directa.** La anterior regla general conoce dos excepciones a las que se refiere el inciso 2° del artículo 73 del C.C.A: una, la del acto que resulta de la aplicación del silencio administrativo positivo, y otra que se configura cuando es manifiesto que el acto administrativo fue obtenido ilícitamente. En los dos supuestos anteriores, **la Administración tiene la facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo** y que la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas, como de los medios utilizados para lograr la expedición del acto administrativo, esté plenamente probada en el procedimiento administrativo que contemplan las referidas disposiciones.

(...)

Conforme al artículo 28 del C.C.A., en la actuación administrativa se aplicará ‘en lo pertinente’ lo dispuesto en el artículo 14 ibidem, que se refiere a la citación de terceros. No obstante, como ‘comunicación’ y ‘citación’ son términos que significan distintas cosas, pues comunicar es simplemente informar por cualquier medio sobre la existencia y objeto de la actuación administrativa, al paso que citar es el acto de la autoridad por medio del cual se ordena la comparecencia de una persona a dicha actuación, **la única manera de entender lo dispuesto en el artículo 28 cuando afirma que en las actuaciones administrativas se comunicará a los interesados la existencia y el objeto de la misma, para lo cual ‘se aplicará en lo pertinente’ lo dispuesto en el artículo 14, es considerando que “lo pertinente” es la manera en que se surtirá la comunicación, que será la misma en que se ordena llevar a cabo la citación cuando ella es requerida. Es decir, ‘por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz’, dando ‘a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la petición’...**”<sup>12</sup>  
(Resaltado no es del texto)

**6. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A):** Los(as) prepensionados(as) “...en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras,

<sup>12</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-215 del 23 de marzo del 2006, M.P. dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez...”<sup>13</sup>

Al hacer referencia a la estabilidad laboral de los servidores públicos en condición de provisionalidad, la Corte Constitucional en Sentencia T-096 de 2018<sup>14</sup> ha establecido:

**“...Los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación en reiterados pronunciamientos, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio público solo tendrá lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones todas estas que deberán ser claramente expuestas en el acto de desvinculación, como garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al acceso en condiciones de igualdad a la función pública...”**

Lo anterior permite clarificar y hacer énfasis en la condición de estabilidad intermedia de los empleados públicos nombrados en provisionalidad; es decir, bajo una especie de *interinidad* mientras la vacante es ocupada por un empleado con derechos de carrera, previo concurso. No obstante, en la misma Sentencia<sup>15</sup> el Alto Tribunal advierte que:

**“...De manera excepcional, la ley permite que los empleos de carrera puedan ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad cuando se presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se requiera de personal suficiente para atender las necesidades de la administración, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades legales o cesa la situación que originó la vacancia. En ese contexto, ha dicho la Corte, si bien es cierto el servidor no podrá permanecer indefinidamente en el cargo, tampoco se crea una equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que no proceda su desvinculación por la simple voluntad discrecional del nominador. [...] Ahora bien, a pesar del carácter eminentemente transitorio de los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera, la Corte ha sido enfática en señalar que el servidor que se encuentra en dicha situación administrativa y, además, es sujeto de especial protección constitucional, como es el caso, entre otros, de las personas en condición de discapacidad o que padecen grave enfermedad, ‘concorre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa’ En ese sentido, el ente nominador está en la obligación de brindarle a los servidores en las condiciones especiales anotadas, un trato preferencial, como acción afirmativa, antes de proceder a nombrar en sus cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez superadas todas las etapas del respectivo concurso de méritos. Ello, con el fin de garantizar el goce real de sus derechos fundamentales (art. 2º Const.) y de llevar a efecto la cláusula constitucional que exige a las autoridades en un Estado Social de Derecho, prodigar una protección especial a las personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, inciso 3º Const.) (...).**

(...)

**“...En síntesis, a los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no les asiste el derecho a la estabilidad propio de quien accede a la función pública por medio de un concurso de méritos. Sin embargo, sí gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, conforme a la cual, su retiro sólo procederá por razones objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para proveer la vacante que ocupan con una persona que haya superado satisfactoriamente las etapas de un proceso de selección e integre el registro de elegibles, dada la prevalencia del mérito como presupuesto ineludible para el acceso y permanencia en la carrera administrativa. En el caso de sujetos de especial protección constitucional, como lo son quienes se encuentran en condición de discapacidad o padecen grave enfermedad, cuando surja la obligación de nombrar en**

<sup>13</sup> Corte Constitucional, Sentencia SU-897 del 31 de octubre del 2012, M.P. dr. Alexei Julio Estrada.

<sup>14</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-096 del 20 de marzo de 2018. M.P. dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<sup>15</sup> Corte Constitucional, Ob. Cit.

*sus cargos a los elegibles de un concurso de méritos, la entidad nominadora deberá, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2º y 13 de la Constitución Política y a los precedentes constitucionales, prodigarles un trato preferencial, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para que sean los últimos en ser desvinculados del servicio público **y, en el evento en que existan vacantes disponibles en cargos iguales o equivalentes a los que venían ocupando, nombrarlos en provisionalidad mientras se realiza un nuevo concurso...*** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a la protección especialísima en la desvinculación de cargo de carrera que son ocupados en provisionalidad, la Corte también se ha pronunciado, estableciendo en Sentencia T-373 de 2017<sup>16</sup> que:

*“...Los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, sin embargo, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad. [...] **Cuando con fundamento en el principio del mérito surja en cabeza del nominador la obligación de nombrar de la lista de elegibles a quien superó las etapas del concurso, en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y prepensionados, en aplicación de medidas afirmativas dispuestas en la constitución, y en la materialización del principio de solidaridad social, se debe proceder con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus derechos y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento...**”*

Es por ello que, tratándose de la especial protección que se da a la **ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A)**, de manera reciente la Corte Constitucional<sup>17</sup> recordó que:

*“...En cuanto a la calidad de pre pensionados alegada por los actores y por la cual consideran ser merecedores de un trato especial, la Sala debe destacar que, según lo ha reconocido esta Corporación, la misma además de que es insuficiente para demostrar la ineficacia del medio judicial ordinario, (...) (en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho), **‘la acreditan las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas o tiempo de servicio.‘...**” (Negrillas y subrayas son mías).*

Y es por ello que, en la citada Sentencia, la Corte Constitucional recuerda:

“(...)

**La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrera administrativa**

**En consonancia con el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual una de las garantías mínimas que debe tener el trabajador es la estabilidad en el empleo, este Tribunal ha reconocido el ‘derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, que se deriva del principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.’ (...)** Así las cosas, la Corte Constitucional ha definido la estabilidad laboral como:

*‘una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la*

<sup>16</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-373 del 8 de junio de 2017. M.P. dra. Cristina Pardo Schlesinger.

<sup>17</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-063 del 23 de febrero de 2022. M.P. dr. Alberto Rojas Ríos.



*búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo, sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales'. (...)*

*Los titulares de la estabilidad laboral reforzada, tal como lo ha sostenido la Corte, son aquellas personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de embarazo, así como aquellos trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que dicha limitación hace referencia a una aplicación extensiva de la Ley 361 de 1997, (...) a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacidad o invalidez. (...)*

*Tratándose de los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de manera clara en el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha reiterado que 'la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.' (...) Sobre este punto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte señaló que:*

*'la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente.'*

**Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro de las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad, pueden haber sujetos de especial protección constitucional, como las madres y padres cabeza de familia, quienes estén próximos a pensionarse, o personas que se encuentran en situación de discapacidad o en debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, la Corte ha reconocido que 'antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento del posible nombramiento.'** (...) En esta dirección, en sentencia SU-917 de 2010, esta Corporación precisó que **'la vinculación de estos servidores se prolongará hasta tanto los cargos que lleguen a ocupar sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.'**

*A modo de conclusión, tal como se reiteró en las Sentencias T-373 de 2017 y T-464 de 2019, en aquellos casos en los que surge, con fundamento en el principio del mérito, la obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó las etapas del concurso, **en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección como los padres o madres cabeza de familia, limitados físicos, psíquicos o sensoriales y pre pensionados, las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en la materialización del principio de solidaridad social -art. 95 ibídem-), (...) relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como en el momento del posible nombramiento...**'* (Negrillas y subrayas no son del texto original).

Y finalmente, además de acceder a la protección constitucional de los derechos conculcados, instó: “...a la Alcaldía de Ábrego (...) a que, en adelante, antes de proceder con el nombramiento de la lista de elegibles, de quienes superan las etapas de los concursos de méritos que coordina, identifique con todo rigor, los cargos que están siendo ocupados por sujetos de especial protección constitucional y adopte en cabeza de estos empleados, las acciones afirmativas a que haya lugar, de conformidad con las reglas jurisprudenciales reiteradas en esta sentencia...”

Y en esa misma línea de interpretación Constitucional, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en Concepto 059401 de 2021<sup>18</sup>, estableció:

**“...De otra parte, los concursos de méritos para proveer empleos de carrera administrativa convocados por la CNSC con posterioridad al 25 de mayo de 2019 no deberá incluir los empleos cuyos titulares en provisionalidad le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación; es decir que, los concursos convocados antes del 25 de mayo de 2019 es posible que hayan incluido los empleos cuyos titulares en provisionalidad tuviesen la condición de prepensionados, en razón a que la exclusión contemplada para estos servidores públicos, se efectuó a partir de la expedición de la Ley 1955 de 2019.**

**Con todo, en el evento que la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor o igual al de aspirantes al de empleos de carrera ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta, entre otros, a quienes tienen la condición de prepensionados, para que, en lo posible, estos servidores sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes, y para los cuales cumplan requisitos, en la respectiva entidad o en entidades que integran el sector administrativo, dicho análisis y decisión es propio de la respectiva entidad u organismo público...”** (Negritas y subrayas son mías).

Al ostentar la parte accionante una calidad de especial protección, con base en la Sentencia T-084 de 2018<sup>19</sup>, que extiende la cobertura de esta protección especial, es procedente brindar la protección a través de la Acción de Tutela, por el inminente daño que se me estaría generando al desvincularme injustificadamente de mi empleo, ya que sobre mis hombros recaen todas las cargas económicas familiares en que se pueden incurrir para el desarrollo completo de un ser humano, esto incluye: alimentación, vestimenta, educación, recreación entre muchos otros. Por esto, es de máxima importancia la conservación de dicho cargo, puesto que ésta es la única fuente de ingresos de mi hogar, que puede garantizar una calidad de vida digna. Siendo así, la honorable Corte Constitucional en la Sentencia citada ha destacado que las políticas o medidas del Estado encaminadas a favorecer a determinadas personas o grupos, son establecidas con el fin de eliminar o disminuir desigualdades o discriminaciones, y éstas gozan de especial protección constitucional.

En relación con las **medidas afirmativas** en favor de las personas que gozan de ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA y el procedimiento a seguir, en los casos en que la lista de elegibles para la provisión definitiva de empleos públicos de carrera administrativa esté conformada por un número menor de personas que el de vacantes ofertadas, el **Decreto 1083 de 2015** consagra:

***“ARTÍCULO 2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:***

- 1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.*
- 2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.*
- 3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.*

<sup>18</sup> Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto del 19 de febrero de 2021, Radicado No.: 20216000059401. Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160825>

<sup>19</sup> Corte Constitucional, Ob. Cit.

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad.

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.

**PARÁGRAFO 1.** Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

**PARÁGRAFO 2.** Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.” (Negrillas y subrayas son mías).

De acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, si en un concurso de méritos se convocan cinco (5) cargos y en la lista de elegibles quedan tres (3) personas, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad, acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia y tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.

Así las cosas, de conformidad con las pruebas obrantes en la presente acción Constitucional, se deduce con mediana claridad la especialísima protección que gozo en torno a mi vinculación en provisionalidad definitiva por la **ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A)**; protección que desconocen los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022<sup>20</sup> (Directivos Docentes y Docentes)**, convocados por el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, al no haber aplicado de manera correcta las garantías establecidas en el **artículo 12** de la **Ley 790 del 27 de diciembre de 2002**, el **parágrafo 2º del artículo 263** de la **Ley 1955 del 25 de mayo de 2019**, el **artículo 8º** de la **Ley 2040 del 27 de julio de 2020** y los **artículos 1º al 3º del Decreto 1415 del 4 de noviembre de 2021**, por lo que se ha contravenido tanto el ordenamiento Constitucional como legal, haciendo indispensable un pronunciamiento judicial con carácter urgente, que garantice la protección in mediata a mis derechos fundamentales conculcados y evite así un perjuicio irremediable.

## V. DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE

Para la procedencia de la presente Acción de Tutela, se debe establecer que, la vulneración a los derechos fundamentales conculcados por las Entidades configura una amenaza cierta y que la misma, a su vez, deviene de manera latente en la materialización de un perjuicio irremediable, lo que hace necesario un pronunciamiento Constitucional de urgencia. Así las cosas, la Corte ha manifestado:

“...En cuanto a la cualificación de los hechos que configuran la inminencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio (i) debe ser inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser evitado a partir de la implementación de acciones

<sup>20</sup> <https://historico.cnsc.gov.co/index.php/2150-a-2237-de-2021-directivos-docentes-y-docentes>

*impostergables. El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...) Hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio..."<sup>21</sup> (Negrillas y subrayas no son del texto original).*

De conformidad con la prueba documental adjuntada, se encuentra acreditado el perjuicio irremediable, respecto de los **Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes)**, convocados por el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC**, la **UNIVERSIDAD LIBRE** y/o la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, sin el respeto de la protección especial por la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A), materializándose así la vulneración inminente y grave de los derechos fundamentales mencionados.

Al respecto, la Sentencia T-318 de 2017<sup>22</sup> ha conceptualizado el perjuicio irremediable, así:

*"(...) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente:*

*En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable..."*

*Así mismo, este Tribunal, ha destacado que cuando se trata de esta hipótesis, el accionante deberá acreditar: (i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad del perjuicio – irremediable.*

*Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto, que hace referencia a la idoneidad del mecanismo de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que este "ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. La idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha indicado, examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado previsible de acudir a ese otro medio de defensa judicial". Así, el juez constitucional deberá efectuar un análisis particular del caso en concreto, pues en este podría percatarse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos fundamentales afectados.*

*En síntesis, la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, aquella puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección definitiva. Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe acreditarlo aportar mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la existencia de este elemento..."*

<sup>21</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-956 del 19 de diciembre de 2013. M.P. dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<sup>22</sup> Corte Constitucional, Sentencia T-318 del 12 de mayo de 2017. M.P. dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.



Ahora bien, puede el Juez Constitucional considerar que existen otros mecanismos para atacar los Actos de la Administración frente al Concurso de Méritos, al encontrar que la argumentación de las Accionadas cuenta con fundamentación fáctica o jurídica que se aprecie inicialmente como razonable, de poseer la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*); a lo cual se debe insistir en el perjuicio irremediable al que se me estaría sometiendo, pues obligaría a iniciar el trámite a través de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa, solicitando a las Entidades Accionadas la aplicación de la ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A), a través del Agotamiento de la Actuación Administrativa (Ley 1755 de 2015 y C.P.A.C.A.); dar el compás de espera para que las Entidades respondan (15 días hábiles, como mínimo), y ante la negativa en la respuesta (sin contar el caso del Silencio Administrativo Negativo – 3 meses), proceder a la presentación de la Solicitud de Conciliación Prejudicial como requisito de Procedibilidad (Ley 640 de 2001 y C.P.A.C.A.) ante los Procuradores Delegados ante los Juzgados Administrativos, que cuentan con un término máximo de tres (3) meses para resolver la solicitud, citando a las Entidades, las cuales en la gran mayoría de casos, no concilian<sup>23</sup>; y una vez agotado este requisito, la presentación del Medio de Control de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos del respectivo Circuito Judicial, el cual, en el mejor de los casos, puede llegar a una media de “430 días hábiles de la Rama Judicial”<sup>24</sup> en Primera Instancia, y una “duración nacional promedio en esta etapa procesal de 269 días corrientes”<sup>25</sup> en Segunda Instancia, lo que en términos de protección constitucional a mi estatus de ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA – PREPENSIONADO(A), lo haría inoperante, pues el lapso para culminar la provisión de cargos a través del Concurso de Méritos podría darse en los primeros meses de este semestre, inclusive, ubicando un escenario ya no de prevención de la vulneración del derecho, sino de consumación del hecho violatorio de mis derechos fundamentales, con ocasión de la CONFIGURACIÓN DE LA LISTA DE ELEGIBLES y posteriormente con la AUDIENCIA DE ESCOGENCIA DE PLAZA asignando los cargos docentes y directivos docentes.

Así, en la ya mencionada Sentencia T-063 de 2022<sup>26</sup> ha quedado establecido:

*“...Ahora bien, es importante reseñar algunas de las diferencias existentes entre la eficacia que ofrece la acción de tutela por un lado y las medidas cautelares desarrolladas por el CPACA, por otro lado, en relación con la protección de los derechos fundamentales de los afectados. En Sentencia SU-691 de 2017, la Corte identificó algunas de ellas. ‘la más relevante es que las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho iniciadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, deben presentarse por intermedio de un abogado y el procedimiento, a pesar de los avances normativos en pro de la eficacia del derecho de acceso a la administración de justicia, se rige por la formalidad y por la regla de la justicia rogada. Por su parte, la acción de tutela no requiere de apoderado judicial y se rige, en contraposición, por el principio de informalidad y permite la adopción de fallos extra y ultra petita. Además, las medidas provisionales proferidas por el juez de tutela no requieren de caución por parte del accionante, lo que sí ocurre ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a la suspensión provisional de actos administrativos.’*

(...)

*Sumado a lo anterior, es evidente que, la desvinculación laboral de los accionantes, implicó una afectación a su mínimo vital y al de las personas bajo su cargo, dado que el salario que devengaban por los puestos que ocupaban al interior de la Alcaldía de Ábrego, constituía su único sustento económico. Con ello, los actores quedaron expuestos a un mayor grado de vulnerabilidad.*

*A partir de lo expuesto, se evidencia que, pese a que los accionantes promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, **en este caso resulta procedente la intervención del juez constitucional, ante la inminente necesidad de salvaguardar el derecho fundamental al mínimo vital de los accionantes. Pues la demora que ha permeado los procesos que***

<sup>23</sup> RUIZ TORRES, S. *Vicisitudes de la Conciliación Prejudicial en los Procesos Contencioso Administrativos*. Universidad Externado de Colombia. 2018. Recuperado de: <https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/cc443c14-a5ca-4780-9221-6b2bac08bb90/content>

<sup>24</sup> Consejo Superior de la Judicatura, *Resultados del Estudio de Tiempos Procesales*. Bogotá, 2016, Abril, Pág. 205. Recuperado de: [https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES\\_18122015.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0](https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/TOMO+I+TIEMPOS+PROCESALES_18122015.pdf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b1bdbf0)

<sup>25</sup> Consejo Superior de la Judicatura, Ob. Cit, Pág. 240.

<sup>26</sup> Corte Constitucional, Ob. Cit.

**adelantaron ante la JCA, ha generado una vulneración prolongada de tal garantía y ha creado un riesgo de perjuicio irremediable, considerando las circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentra cada uno de los accionantes, especialmente por su edad, estado de salud, condición de padres cabeza de familia (...), desempleados y en situación de pobreza.**

**Por las mismas razones, resultaría desproporcionado, seguir sometiendo a los actores a un juicio dispendioso que en el caso concreto ha constituido una espera interminable y que además debe surtir por intermedio de un apoderado judicial. Dicha situación refuerza la conclusión de que la eficacia que ofrece la acción de tutela, en relación con la protección de los derechos fundamentales de los accionantes en este asunto, supera la eficacia que debería caracterizar un proceso administrativo previsto para estos casos, sobretodo, mediante la adopción de medidas cautelares...** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Conforme lo expuesto, es procedente la solicitud de analizar los argumentos del aquí tutelante, en el marco de la protección de los derechos fundamentales conculcados, de cara a la moralidad administrativa y considerando la conexidad con los derechos humanos consagrados en la **Constitución Nacional**, consistentes en el **DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.), DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.) Y A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.); POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.), AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.), ENTRE OTROS**, así como los principios de **LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA EQUIDAD, EDUCACIÓN DE CALIDAD, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÉRITO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

## VI. AUSENCIA DE PARALELISMO DE ACCIÓN

De conformidad con el **artículo 37 del Decreto 2591 de 1991**, manifiesto bajo gravedad de juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto de los mismos Hechos y Derechos.

## VII. PETICIÓN FORMAL

### 1. SENTENCIA DE TUTELA:

- 1.1. Se ampare el consagrados en la **Constitución Nacional**, consistentes en el **DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.), DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.) Y A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.); POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.), AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.), ENTRE OTROS**, así como los principios de **LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA EQUIDAD, EDUCACIÓN DE CALIDAD, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÉRITO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, y cualquier otro del mismo rango que se determine como violado.
- 1.2. Se Ordene la Suspensión del Acto Administrativo de Desvinculación contenido en la Resolución No. 82 de 2024, por medio la cual se da por terminado mi nombramiento en provisional en vacancia definitiva.
- 1.3. Se ordene a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL META me Reintegre de Inmediato laboralmente al Cargo que venía desempeñado al momento de mi Desvinculación como Docente de Aula o a otro de igual o mejores condiciones o sea Reubicado en otra institución, así mismo se me afilie al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la entidad que preste el servicio de salud, junto con todas las garantías y antigüedad que gozaba hasta el día de la Desvinculación Laboral, además del pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde el mes de febrero de 2024 como salarios y primas, por encontrarme dentro de las causales de estabilidad laboral reforzada.
- 1.4. Solicito indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del Meta causó un perjuicio irremediable al momento de desconocer mi status de prepensionada.

2. Se ordene a las Entidades Accionadas que, una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remitan a su Despacho, copia del Acto Administrativo mediante al cual acatan lo decidido, con las formalidades de Ley, so pena de las sanciones de ley por **desacato** a lo ordenado por Sentencia de Tutela.
-

3. Se autorice la expedición de copias, a mi costa, de la Sentencia de Tutela y de la contestación que al fallo produzcan las accionadas.

### VIII. PRUEBAS

A pesar que el **literal d) del artículo 1º del Decreto 1415 de 2021** establece “*Personas próximas a pensionarse: **Sin perjuicio** de que el servidor público que considere encontrarse en este grupo adjunte los documentos que acreditan la condición que invoca, **los jefes de personal o quienes hagan sus veces deben verificar que a los servidores que puedan encontrarse en estas circunstancias en efecto les falten tres (3) años o menos para reunir los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez, y expedir constancia escrita en tal sentido...***”, a efectos de ser tenidas en cuenta, solicito al(la) señora(a) Juez, decretar y practicar las siguientes:

1. Copia de mi Cédula de ciudadanía.
2. Terminación de nombramiento de provisionalidad 82 de 2024
3. Hoja de Vida
4. Copia de mi historia laboral donde se puede evidenciar mis certificaciones laborales y nombramientos – contratos
5. Certificado de Protección y Colpensiones
6. Las que el señor Juez considere necesarias.

### IX. COMPETENCIA

Es usted, Señor(a) Juez Constitucional, competente para conocer de esta Acción de Tutela, de conformidad con lo dispuesto en el **numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015**, modificado por el **Decreto 333 de 2021**, que indica que: “*Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.*”

### X. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento mi pedimento en lo establecido en los artículos Art. 23, 86 de la Constitución Nacional y Decretos Reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992 y D. L. 1382/2000; Decreto 2150 de 1995, art. 10; Ley 962 de 2005, arts. 11 y 14; Ley 1755 de 2015.

### XI. ANEXOS

1. Las relacionadas en el Acápito de Pruebas.
2. Una (1) copia en formato PDF de la Acción de Tutela y sus anexos para el traslado a las Entidades Accionadas y para el archivo de su Juzgado.

### XII. NOTIFICACIONES

**ACCIONANTE:** En la dirección referenciada

**ACCIONADAS:** En las direcciones referenciadas.

Del(la) señor(a) Juez,

Luz Ofelia Borbon Fontecha

**LUZ OFELIA BORBON FONTECHA**

**C. C. No**

Acacias – Meta